



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/48/147/Add.1
29 de septiembre de 1993
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

Cuadragésimo octavo período de sesiones

SOLICITUD DE INCLUSION DE UN TEMA EN EL PROGRAMA PROVISIONAL
DEL CUADRAGESIMO OCTAVO PERIODO DE SESIONES

REALIZACION EFECTIVA DEL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACION
MEDIANTE LA AUTONOMIA

Carta de fecha 28 de septiembre de 1993 dirigida al Secretario
General por el Representante Permanente de Liechtenstein ante
las Naciones Unidas

Adición

REUNION OFICIOSA DE EXPERTOS SOBRE LA LIBRE DETERMINACION
CELEBRADA EN SCHAAN (LIECHTENSTEIN) DEL 16 AL 18 DE MARZO
DE 1993

Breve informe del Presidente

La reunión oficiosa de expertos fue convocada por el Gobierno de Liechtenstein y tuvo lugar en Schaan (Liechtenstein) del 16 al 18 de marzo de 1993. El Gobierno de Liechtenstein designó a la Embajadora Claudia Fritsche (Representante Permanente del Principado de Liechtenstein ante las Naciones Unidas) y a Sir Arthur Watts QC (Asesor del Gobierno de Liechtenstein) para que presidieran conjuntamente la reunión.

La finalidad de la reunión era ayudar al Gobierno de Liechtenstein a examinar más a fondo las ideas relativas a la libre determinación planteadas inicialmente por Su Alteza Serenísima el Príncipe Hans-Adam II, Jefe de Estado del Principado de Liechtenstein, en su declaración formulada ante la Asamblea General, en el cuadragésimo sexto período de sesiones en 1991, y expuestas con mayor detalle en posteriores declaraciones de los representantes de Liechtenstein. Asistieron a la reunión Su Alteza Serenísima y 46 participantes nombrados a título personal por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y por los Estados reconocidos como observadores, así como por algunas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Entre los documentos que los participantes tuvieron ante sí durante la reunión figuraba un memorando en que se resumían los principales aspectos de las propuestas formuladas por Liechtenstein. Se adjunta un ejemplar de dicho memorando.

Debate general

La reunión comenzó con un debate general de las cuestiones que planteaba la iniciativa de Liechtenstein. En general, los participantes acogieron ampliamente dicha iniciativa como una contribución valiosa, ya que reconocían la urgencia e importancia de los problemas que tenían su origen en las aspiraciones no satisfechas de las diversas comunidades dentro de los Estados. Al mismo tiempo, se reconoció que se trataba de un tema muy delicado y que algunas ideas en particular presentaban ciertas dificultades.

Varios participantes observaron que la "libre determinación" era un concepto complejo, basado en nociones amplias de la democracia y de los derechos y libertades de la persona.

Muchos representantes observaron asimismo que el concepto de "libre determinación" se había desarrollado principalmente en la lucha contra el colonialismo y por el logro ulterior de la independencia. Sin embargo, el concepto había evolucionado y en el mundo moderno había adquirido un significado más complejo. Había surgido una nueva serie de problemas relativos a la libre determinación y la comunidad internacional tendría que reconsiderar sus enfoques al respecto. La libre determinación ahora parecía entrañar en ciertos casos el riesgo de una fragmentación de los Estados; esto había que evitarlo. La libre determinación no debía conducir necesariamente a la independencia ni a la modificación de las fronteras.

Se consideraba en general que la iniciativa de Liechtenstein estaba orientada a la búsqueda de nuevas normas y nuevas estructuras, y que abría nuevas posibilidades para la aplicación del principio de libre determinación. Si bien dicha iniciativa se mantenía dentro del marco más amplio del principio de libre determinación y no excluía necesariamente el logro de la independencia, en la práctica se aproximaba más a formas de evolución que no llegaban a abarcar la independencia ni suponían el desmembramiento de los Estados mediante la secesión o por otras vías.

Se observó que la iniciativa de Liechtenstein hacía hincapié en la creación de nuevas estructuras dentro del Estado, y especialmente en las formas de descentralización territorial o autonomía (es decir, formas de libre determinación "interna", por oposición a la libre determinación "externa", que se manifestaba en conceptos de independencia y soberanía). Varios participantes sugirieron, en consecuencia, que convendría dejar de emplear el término "libre determinación" como principio fundamental de la iniciativa de Liechtenstein.

Aunque algunos participantes hicieron notar el posible riesgo de que la iniciativa de Liechtenstein se aprovechara para limitar ulteriores adelantos en el ámbito de la libre determinación y defender el statu quo, la mayoría estimaban que la propuesta no iba en detrimento de ese principio, sino que era compatible con él y, de hecho, lo reforzaba.

Varios participantes observaron que cabía preguntarse si, una vez que un Estado hubiera obtenido la independencia mediante el ejercicio del derecho a la libre determinación, los grupos dentro de ese Estado tenían, a su vez, el derecho de reclamar la libre determinación para sí mismos y así, quizás, ad infinitum. Era preciso establecer un equilibrio entre la libre determinación y la necesidad de los nuevos Estado de crear una nación y lograr la estabilidad interna. Había que evitar que se abusara de la libre determinación, fomentando el separatismo.

La reunión pasó luego a considerar una serie de temas concretos.

El concepto de "comunidad"

Se expresó amplio apoyo, en principio, a la propuesta de que se adoptara un nuevo concepto como el de "comunidad" como unidad básica a partir de la cual podrían establecerse los derechos de autonomía. Ese concepto era útil en cuanto se apartaba de las ideas existentes, y concordaba con el enfoque de la iniciativa de Liechtenstein, centrado en la autonomía, más que con los planteamientos existentes sobre la libre determinación, centrados en la independencia.

Se reconoció en general la necesidad de que la definición de "comunidad" se basara esencialmente en criterios de territorialidad. Sin embargo, se señalaron las posibles dificultades de definición que podrían surgir en diversos aspectos. Estas incluían: la relación con el concepto de nacionalidad; la identidad territorial de una "comunidad" y los problemas de incluir a las comunidades errantes, dispersas en un territorio, o que habitan en zonas transfronterizas; los rasgos distintivos que debe poseer una determinada "comunidad"; su tamaño; la necesidad de mantener la flexibilidad en la definición, para tener en cuenta los diversos factores que dan a una comunidad su identidad particular; los factores económicos que suelen determinar la identidad de una comunidad; y la relación entre la definición de una comunidad y su grado de autonomía.

Muchos de los participantes señalaron la diferencia entre "comunidad", por una parte, y "minoría" y "población autóctona", por otra, así como la parcial coincidencia entre esos conceptos.

Varios de los participantes consideraban que el hecho de que la iniciativa de Liechtenstein hiciera hincapié en la situación de las comunidades la situaba en el contexto de los derechos humanos colectivos.

Salvaguardias generales

Algunos participantes estimaban que las posibles salvaguardias se referían en la práctica a las medidas de control y compensación que se necesitarían para que un nuevo sistema funcionara eficazmente. Estos eran los mecanismos a través de los cuales se lograrían soluciones de compromiso. Se reconoció la necesidad de contar con algunas medidas de control y compensación.

Se observó que las "salvaguardias" dependían del punto de vista que se adoptara: la salvaguardia de los intereses del Estado no representaba necesariamente la salvaguardia de los intereses de una determinada comunidad dentro de éste.

Se expresaron diferentes opiniones en cuanto a la necesidad de establecer alguna forma de salvaguardar la integridad territorial de los Estados. Varios participantes consideraban importante que se diera ese tipo de seguridad a los Estados, especialmente porque en otros contextos semejantes solían existir tales salvaguardias para compensar las disposiciones tendientes al logro de la independencia; sin embargo, algunos participantes consideraban que, por definición, el desarrollo de formas de autonomía interna no podía abarcar la independencia ni podía plantear amenaza alguna a la integridad territorial del Estado y que, por tanto, no procedía establecer salvaguardias a ese respecto. A juicio de otros participantes, la insistencia en la defensa de la integridad territorial era una forma de impedir el goce del derecho a la libre determinación por medio de la independencia.

Algunos participantes se mostraron renuentes a aceptar que se prohibiera a las comunidades el recurso a la fuerza para lograr sus fines mientras los Estados pudieran seguir utilizando la fuerza contra las comunidades, aun para los fines de mantener el orden y hacer cumplir la ley. Asimismo, el uso de la fuerza por parte de las comunidades podía verse justificado en algunos casos (por ejemplo, ante la opresión de las autoridades estatales).

Varios participantes observaron que la democracia y el cabal respeto de los derechos humanos ofrecían las salvaguardias necesarias (o quizás, las condiciones previas) para el ejercicio efectivo del derecho de libre determinación.

Se sugirió que una posible salvaguardia consistiría en evitar la injerencia extranjera.

Algunos participantes consideraron que era preferible no especificar en forma detallada las posibles salvaguardias. Sería mejor que las partes interesadas convinieran los detalles de común acuerdo, recurriendo a la "genialidad de los pueblos".

Primer nivel de autonomía inmediata;

Niveles subsiguientes de autonomía opcionales

Se consideró que el primer nivel de autonomía inmediata abarcaba los derechos fundamentales necesarios para asegurar la existencia de la comunidad y mejorar su nivel de vida, así como para proteger su identidad separada dentro del marco del Estado. En los niveles subsiguientes y opcionales de autonomía se podría ampliar progresivamente el grado de intervención de la comunidad en la administración de sus propios asuntos.

Se reconoció ampliamente que el concepto de autonomía (como el de soberanía y el de independencia) no es absoluto, sino que admite una evolución gradual y estructuras variables. Los participantes acogieron con beneplácito que la iniciativa de Liechtenstein ofreciera flexibilidad a ese respecto.

Se estimó que la autonomía era un concepto muy valioso, ya que proponía un estructura sociopolítica que podía ser útil en la búsqueda de una mayor libertad individual. Sin embargo, algunos participantes señalaron que la autonomía

también podía tener efectos divisivos a diferencia de la evolución de Estados multiculturales, donde todos los grupos eran interdependientes en muchos aspectos.

Muchos participantes observaron que el hacer hincapié en la autonomía permitía evitar o al menos reducir considerablemente los problemas que podían plantear las propuestas basadas en el logro de la independencia. Muchas comunidades no deseaban la independencia sino que se mostrarían satisfechas con mucho menos, siempre que se les diera margen suficiente para expresar su propia identidad. Por tanto, la autonomía podría ser una forma adecuada de expresión de la libre determinación, sin que ello redundara necesariamente en menoscabo de otras formas de libre determinación.

Algunos participantes señalaron que existía una relación entre la autonomía y el federalismo.

Varios participantes estimaban que el enfoque consistente en considerar las diversas etapas de la autonomía como una progresión lineal (en que cada etapa, con la adición de unos cuantos elementos, conduciría a la etapa siguiente) podía ser demasiado rígido; quizás convendría adoptar un enfoque más flexible, según las circunstancias, de modo que el progreso de las comunidades se ajustara más exactamente a sus necesidades. En la práctica, se trataría probablemente de un proceso de diálogo constante que daría diversos tipos de resultados en distintos ámbitos.

Otros asuntos pertinentes

Muchos participantes se refirieron a la necesidad de contar con mecanismos para respaldar las nuevas disposiciones que se adoptaran, a fin de asegurar su eficacia en la práctica.

Se señaló y se celebró ampliamente que la finalidad básica de la iniciativa de Liechtenstein al parecer fuera la de encontrar medios de evitar los conflictos que solían surgir cuando no se daban a las comunidades medios de expresión adecuados. En ese contexto, varios participantes observaron que era necesario establecer un "sistema de alerta" para identificar las situaciones en que podían surgir tales conflictos.

Se señaló que las guerras civiles dentro de los Estados solían deberse a diferencias entre los dirigentes políticos más que a las aspiraciones opuestas de diversos grupos dentro de los Estados. Era preciso estudiar las causas reales de los conflictos internos.

Varios participantes observaron que actualmente no existían mecanismos adecuados para ayudar a resolver los problemas relativos a la libre determinación. Muchos participantes estimaban conveniente establecer nuevos foros o nuevos procedimientos para tratar esos temas, incluidos los problemas relativos a la solución de las controversias que surgieran en ese contexto. Algunos participantes consideraron que sería útil establecer mecanismos de coordinación.

Se sugirió la posibilidad de establecer algún tipo de centro consultivo internacional al cual podrían recurrir los gobiernos y las comunidades a fin de obtener asesoramiento sobre las posibles opciones para crear estructuras gubernamentales adecuadas para hacer frente a sus problemas particulares en el ámbito de la libre determinación.

Algunos participantes advirtieron que no sería conveniente establecer nuevas instituciones gubernamentales sin tener una idea muy precisa de las funciones que deberían cumplir, puesto que ya existían instituciones cuyas funciones abarcaban al menos parcialmente éste ámbito. Quizás resultarían más eficaces otros mecanismos o recursos opcionales como el de alentar a los grupos de derecho privado que ejercen en este campo.

Nueva York, 20 de septiembre de 1993
